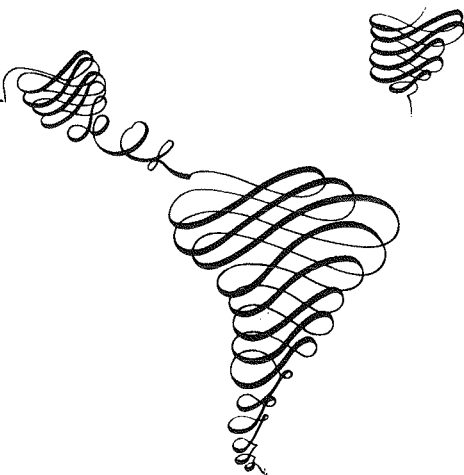




Corrupción, ¿anécdota o categoría?

DE ser una mera anécdota, más o menos circunstancial, la corrupción ha pasado a convertirse en tema de debate nacional. El punto de inflexión lo marcó, probablemente, el caso Juan Guerra, destapado ahora hace algo más de un año. Desde entonces las denuncias no han hecho más que aumentar y el ciudadano se pregunta cada vez más inquieto qué es lo que está ocurriendo.

Hay respuestas para todos los gustos. Unos, los más escépticos, piensan que la corrupción es una constante política en todos los tiempos. Hubo corrupción durante los años de la dictadura y la hay ahora. Aquélla, en no pocos casos, podía ser una corrupción pueblerina, tercermundista; ésta, la de ahora, es una corrupción a lo grande, propia del país que España es, uno de los quince o veinte más opulentos del planeta. Pero en la opinión de estas personas, la clase política, por los instrumentos de que dispone, está al borde de la corrupción. La practica o la consiente. Y expresan esta opinión con una generalización que, en cuanto tal, es abusiva: todos los políticos acaban haciendo lo mismo.

El tema de si la corrupción actual es mayor o menor que la de la época de la dictadura no deja de tener su interés. Desde el siglo XIX se repite incesantemente que «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente» (lord Acton). Si

esta segunda parte de la afirmación es cierta, habría que pensar que en una dictadura la corrupción debería ser siempre, por principio, mayor que en la democracia. Lo cual significa, o bien que la corrupción actual es menor que la de entonces, a pesar de las apariencias, o bien que nuestro país es menos democrático de lo que parece. Otro corolario que también puede desprenderse de la afirmación anterior, y sobre el que quizá convendría meditar, es el riesgo que para la democracia tiene siempre la corrupción. O la democracia acaba con la corrupción, o la corrupción acaba con la democracia.

SI la democracia es el mejor antídoto conocido contra la corrupción (al permitir la publicidad de este tipo de conductas, que en los regímenes totalitarios y dictatoriales permanecen siempre silenciadas), entonces debe darse una correlación entre el puesto de un país en la escala de las naciones democráticas y el lugar que ocupa en el orden de los países corruptos. Y, en efecto, algo de esto parece que sucede. Suele aceptarse que en ciertos países iberoamericanos la corrupción es mayor que en Italia, y en ésta mayor que en Inglaterra. Lo cual viene a coincidir con el lugar de tales países en la escala de la democracia: Inglaterra ocuparía un lugar destacado, a gran distancia estaría Italia, y aún más lejos ciertos países iberoamericanos.

El caso de España es, en más de un sentido, semejante al italiano. Por eso tenemos que preguntarnos si la corrupción es algo que se da principalmente en el terreno político —o muy a la vera de la política— y constituye por tanto un arma arrojadiza que se esgrime ante la proximidad de unas elecciones generales. ¿Va la corrupción más allá? ¿Habría que hablar de la corrupción como una especie de «categoría nacional»? Quizá es un estereotipo muy mediterráneo, que se manifiesta en esa nutrida galería de tipos humanos que van desde las figuras entrañables e ingenuas del «pícaro» y el «pillo» hasta la desabrida del «mafioso», pasando por la del «listo», a diferencia del «estudioso» o del «inteligente». Si hace sesenta o setenta años el prestigio en España lo tenían los inteligentes y los estudiosos, a los que se les anteponeía el

«don» en señal de respeto («don Miguel» era Unamuno, «don José», Ortega y Gasset, «don Gregorio», Marañón, etc.) hoy los hombres admirados por los ciudadanos ya no llevan don.

Quizá esto es señal de que el ciudadano los considera más listos que estudiosos: son empresarios o economistas que saben ganar miles de millones de pesetas en tiempos muy breves.

Son los Albertos, los Migueles, o los Marios.

Cuentan que en cierta ocasión preguntó un periodista a don Pío Baroja por una frase de Eugenio d'Ors que había sido pintada tras la Guerra Civil en el frontispicio de un edificio público de Madrid, y que decía así: «Lo que no es tradición, es plagio». El periodista quería saber la opinión de Baroja sobre ella, y éste le contestó diciendo que nunca había sabido lo que significaba, hasta que la lluvia fue borrando algunas de sus letras y quedó así: «Lo que no es adición, es agio».

Ahora, decía Baroja, sí la entiendo.

EL agiotaje lo define nuestro diccionario oficial como la «especulación abusiva». Han quedado atrás los viejos tiempos medievales, en los que los moralistas no veían modo de justificar el cobro de intereses por el préstamo de dinero. El dinero es, ciertamente, un bien económico, y en cuanto tal, fuente de nueva riqueza. Tiene sentido, pues, negociar con él. Pero el negocio tiene sus límites. En principio cabe decir que esos límites vienen marcados por el libre juego de la oferta y la demanda, es decir, por las leyes del mercado.

Pero en unas sociedades tan complejas como las nuestras, donde el control estatal sobre el mercado es muy fuerte, hay siempre el peligro de utilizar esos mecanismos de intervención, sólo justificables en función del bien común, para provecho propio. El uso de informaciones reservadas para acaparar pingües beneficios es un caso paradigmático de lo que venimos diciendo.

Hay otro hecho que merece una meditación detenida. Como es bien sabido, un eje de la política económica de nuestros últimos gobiernos son las medidas monetarias. Muy en primer lugar, el mantenimiento de unos tipos de interés artificialmente elevados que, si bien ayudan a contener la

inflación, atraen el dinero fácil y fomentan la especulación. Se trata del procedimiento no muy ortodoxo, que tiene la característica de penalizar el capitalismo industrial (en última instancia, al «trabajador») y primar al capitalismo financiero (más fácilmente «especulador»). Es claro que una política económica razonable no puede ignorar las medidas monetarias. Pero una insistencia excesiva en los aspectos monetarios y financieros muy por encima del desarrollo industrial acaba transmitiendo a la conciencia ciudadana una idea devaluada del trabajo y una imagen falsa de los bienes de la especulación. Nuestra situación actual es un ejemplo paradigmático de esto. Acabamos de descubrir al gran especulador que de la noche a la mañana se ha convertido en el héroe nacional. Lo importante ya no es trabajar, producir, crear, sino especular y ganar dinero. Cuando en una sociedad acontece este cambio de valores, tenemos derecho a pensar que se está envileciendo. Esto sucede siempre que una nación de honrados trabajadores empieza a convertirse en otra de pícaros especuladores. Por lo demás, las políticas económicas fuertemente monetaristas, que fomentan esto, merecen una abierta contestación moral. La elevación artificial de los tipos de interés no parece justificable más que en casos muy críticos, y por períodos breves de tiempo. Lo demás es injusto, porque empobrece al trabajador y enriquece al especulador. Cuando alguien se enriquece, conviene siempre preguntarse a costa de quiénes lo hace.